

**Ponencia sobre la crisis agraria en Colombia  
(Dentro de la mesa Gobierno-Farc-EP)**

*Speech on land crisis in Colombia  
(In Colombian Government-Farc-EP peace negotiations)*

Luis Bernardo Díaz\*

**Resumen**

*El problema agrario es el detonador de la guerra interna en Colombia. La falta de reforma agraria, el desplazamiento forzado, la precariedad de los campesinos, son todos elementos que alimentan el conflicto. El autor propone una serie de políticas públicas a efectos de superar el conflicto.*

**Palabras clave**

*conflicto armado, Colombia, guerra, mesa de La Habana, proceso de paz.*

**Abstract**

*The agrarian problem is the explosive of the internal war in Colombia. The absence of a land reform, the forced displacement and the poverty of farmers, are all elements that nourish the conflict. The author proposes some public politics in order to overcome the conflict.*

**Key words**

*armed conflict, Colombia, war, La Habana negotiation table, peace process.*

---

\* Director Ciede Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, vocal de relaciones internacionales Asoprofe UPTC, miembro Acadeum.

Nuestra generación y la siguiente no ha vivido un solo día de paz en Colombia. Por ello es menester que de este amplio Foro salgan las propuestas que los combatientes en la mesa de La Habana deben incorporar para superar el conflicto armado. Veníamos diciendo desde el Encuentro de Oslo que el diálogo no se podía circunscribir a los guerreros, sino que la sociedad civil, y especialmente las víctimas, debíamos hacer parte de este. Las partes en conflicto interpretaron bien el mensaje. Eso debemos reconocerlo. Lamento la actitud negativa de Fedegan frente a este escenario, el cual, por boca de su vocero, ha sido minimizado. No, señor Lafaurie, nosotros merecemos respeto, y creemos que por importante que sea su sector ganadero, no está exento de juicios de responsabilidad frente a los desafueros cometidos en este desangre nacional.

Como bien dijo Darío Fajardo, el tema agrario se puso de moda. Ha sido el primer punto de la agenda, porque entraña aspectos medulares del conflicto, como la discriminación, el atraso, la marginalidad, la exclusión, el destierro, la muerte, la expropiación, el arrasamiento, etc. Esos fenómenos afectan a la mayoría, pero solo unos pocos son los responsables, los grandes propietarios de vastas extensiones a ciencia y paciencia de los distintos gobiernos de una capa social claramente establecida. Aún recordamos el caso del señor Marulanda, embajador ante la Unión Europea, propietario de la Hacienda Bellavista, que gastaba un día recorriendo a caballo su finca y no veía donde terminaba. Para salvar a unos incómodos labriegos que estaban en sus predios trabajando sus ociosas tierras, les quemó sus ranchos y los condenó al desplazamiento. Después se comprobaría su vinculación con el paramilitarismo.

Los intentos de reforma agraria en Colombia han sido acallados por las balas asesinas de la derecha terrateniente, que no escatima esfuerzo para contar entre sus presecas el subcampeonato mundial de desplazamiento forzado.

Una de las conductas mas vergonzosas fue el robo descarado de los recursos del Ministerio de Agricultura por parte de un sector del uribismo, para orientarlos hacia familias ricas e incluso a reinas de belleza que se volvieron labriegas de la noche a la mañana, temas que en muchos casos permanecen en la impunidad. Los campesinos sufren por conseguir apoyo a sus cultivos, pues el sistema financiero está bloqueado para ellos, solo apoya a los que más tienen.

La clase dominante se da cuenta del tema y se preocupa por la afectación del derecho a la alimentación que se ve comprometido en la medida en que ya es preocupante el volumen de importación de alimentos en gran escala, donde la bandeja paisa ya es de todo, menos paisa.

Mientras en América Latina los esfuerzos de reforma agraria eran evidentes en otras partes del continente, como en Bolivia en los cincuenta, es claro que en Colombia se ha producido una contrarreforma que afecta a los campesinos, indígenas, negritudes, y en general a los pobres del campo, lo cual ha generado procesos de marginalización

creciente, expulsiones a las ciudades que hacen que se concentre en las mismas más del doble de la población que vive en los campos. Los riesgos en materia ambiental, los graves problemas de locomoción, de seguridad personal y el nulo ejercicio del derecho a la ciudad, hacen que existan personas que busquen el retorno al verde, al campo, a la provincia, sobre la base de lo invivible que se han vuelto las ciudades, además de impersonales. No se vislumbra una política seria de retorno al campo. La gente lo hace más a título individual, a veces enfocados en retos o en melancolías. Desde luego, el volumen del mercado se concentra en las grandes ciudades, desestimando el campo, y ello hace que miles de jóvenes campesinos emigren a los centros fabriles y de servicios, para ganar los misérrimos sueldos mínimos que pagan los empresarios.

El abandono del campo por el Estado se demuestra en temas como la atención educativa, completamente dejada al garete, como lo demuestran los resultados de las pruebas Saber Pro, donde hay una clara relación entre pobreza y bajo rendimiento académico. Muchos jóvenes campesinos se ven obligados a desertar del sistema educativo, pues deben proveer a la subsistencia de su familia y de ellos mismos. Por los campos boyacenses y de otras regiones se ven a diario las camionadas de jóvenes campesinos que son llevados como recuas a los jornales de tierras lejanas que no son de su propiedad, a cambio de unas míseras monedas. Allí bien vale la pena incidir en políticas públicas de inclusión. También insistimos en derogar el servicio militar obligatorio que fuerza a nuestros jóvenes a participar en una guerra que no es la suya, sacrificando inútilmente su vida, manipulados por una ideología napoleónica trasnochada que habla de héroes y victorias pírricas.

Políticas públicas que no pueden operar si lo que reina es la incapacidad, el despotismo y la corrupción en los pueblos. Los caciques electorales abusan del pueblo y debido a la falta de conciencia política intercambian votos por favores para reelegirse indefinidamente, en una escala desde lo local hasta lo nacional, exponiendo una vergonzosa clase política que no va a defender a los campesinos que la eligió, sino a terminar de sepultarla. Mientras la Constitución del 91 garantizó en el Congreso la presencia de Indígenas y afrocolombianos, con todas las dificultades de su representación, hoy no podemos decir que en veinte años de vigencia de la Carta haya sido elegido un solo campesino auténtico al Parlamento. Por ello los niveles de marginación se acentúan y si a eso se suman las estigmatizaciones, criminalizaciones y exterminio de sectores conscientes políticamente, el panorama se torna aún más oscuro.

Es indudable que el problema del narcotráfico ha atizado la hoguera y por ello ya se evidencian voces desde el establecimiento mismo que claman por la despenalización. Es claro que la batalla emprendida desde Nixon está perdida.

Los derechos económicos y sociales que están mercantilizados a nivel nacional, claramente se ven reflejados en nuestros campos e impactan de manera bárbara en los más débiles. En un tema como la salud, que es un derecho y no una mercancía, han

aumentado las consultas a los teguas y sobanderos, pues el acceso a los médicos y especialistas es algo lejano para millares de nuestros compatriotas que viven en los campos.

El panorama se torna aún más complejo con la política de locomotora minero-energética que Santos impulsa. Mientras otros gobiernos en la región expulsan a las multinacionales, en Colombia son recibidas con alborozo por parte del Gobierno, que le entrega concesiones multimillonarias, dejando dolor, miseria, huecos y muertos en donde exportan capitales. La lucha que hemos emprendido contra Maurel and Prom, Omega Energy y otras multinacionales que afectan los acuíferos y perjudican de por vida los terrenos con vocación agrícola o ganadera, enfrenta retos inconmensurables, como superar un malhadado Plan Nacional de Desarrollo que la coalición dominante en el Congreso, denominada de Unidad Nacional, ha diseñado como techo ideológico – normativo vinculante para todos los poderes públicos. Por ello celebro la actitud enhiesta de varios alcaldes y concejales del nordeste antioqueño que han prohibido la exploración y explotación de la riqueza minera o energética en la jurisdicción de sus territorios, a pesar de que saben los límites legales a que se enfrentan y la férula implacable del procurador.

Por ello hay que empoderar a las comunidades para hacer respetar nuestras riquezas irre recuperables. Hacer respetar la pachamama, la madre tierra. Los indígenas Uwas dicen que la tierra es como el cuerpo humano y que el petróleo, al ser la sangre de la tierra, cuando es extraída por las transnacionales, es como si se le sacara la sangre al cuerpo humano, o sea que queda exangüe. Muere.

De ahí la importancia de asesorarse internacionalmente y ejercer la jurisdicción en sistemas que puedan acompañar estos procesos, al lado del empoderamiento comunitario.

Que las partes en La Habana se inspiren en el pensamiento por el equilibrio del mundo que nos legó Martí, que comprendan que Patria es humanidad, y que en el campo está buena parte de esa salvación. De lo contrario, se producirá la autofagia o el suicidio, y estamos aún a tiempo de evitarlo. Confío en que los países facilitadores, como Noruega, Chile, Venezuela y Cuba, brinden horizontes claves en la orientación de los acuerdos entre las partes. Es especialmente reconfortante el reciente triunfo del Gobierno en Venezuela, que arrasó en las elecciones regionales, demostrando así que por la vía electoral es posible llevar a cabo grandes transformaciones políticas y sociales, aun en estado de convalecencia de su máximo ariete. Ese ejemplo, así como otros que brillan en el cielo latinoamericano, permiten albergar ahora más que nunca esperanza en el avance de los resultados de una paz que no ha gozado mi generación, pero que estimulamos desde este escenario para superar el conflicto armado y social. Si se pudo en Irlanda y en Sudáfrica, ¿por qué no podemos en Colombia?

Gracias.

Bogotá, 17 de diciembre de 2012.